



LA CONCERTACIÓN NO LOGRA
IMPULSAR AÚN UN CAMBIO
DE RUMBO QUE PERMITA
DEFINIR UN NUEVO PROYECTO
POLÍTICO Y ECONÓMICO
PARA CHILE. SIN EMBARGO,
TODAVÍA PARECE REUNIR
MEJORES POSIBILIDADES QUE
LA DERECHA PARA GANAR UN
QUINTO GOBIERNO.

*El gobierno de Bachelet
en la mitad de su mandato*

Balance y perspectivas

por **MANUEL ANTONIO GARRETÓN M.** profesor del Departamento de Sociología,
Universidad de Chile, y de la Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín

Artista invitada **CATALINA PARRA**

¿QUÉ BALANCE PUEDE HACERSE DE ESTE PRIMER PERÍODO DE GOBIERNO, QUÉ PUEDE ESPERARSE DE LOS DOS AÑOS QUE LE RESTAN Y CUÁL PUEDE SER EL FUTURO DE LA CONCERTACIÓN Y DE LA ALIANZA, LA COALICIÓN OPOSITORA DE DERECHA?

El 11 de marzo de 2008 el gobierno de Michelle Bachelet celebraba su segundo año, la mitad del período constitucional, en un sistema en el que no hay reelección. Un par de meses antes se había realizado un importante cambio de gabinete y la Democracia Cristiana, uno de los partidos de la Concertación de Partidos por la Democracia, coalición que gobierna el país desde la recuperación democrática en 1990 a través de cuatro gobiernos sucesivos, había experimentado la escisión de un senador y de un grupo de diputados. Quizás se trataba del momento más difícil de la gestión, dado que se perdía la mayoría en ambas Cámaras. Al mismo tiempo que se celebraba el inicio del segundo año, el gobierno promulgaba una de sus leyes emblemáticas: la reforma previsional, con la que se había querido dar el sello de un Estado de protección. Esa ley mejoraba ampliamente la pensión mínima, aseguraba una pensión a todas las mujeres, creaba sistemas de previsión para jóvenes e incorporaba en el sistema a sectores hasta entonces excluidos. Por otro lado, y por primera vez desde la recuperación democrática, se enfrentaba la acusación constitucional de la derecha contra un ministro, en este caso, la Ministra de Educación.

En este panorama convulsionado y contradictorio políticamente, ¿qué balance puede hacerse de este primer período de gobierno, qué puede esperarse de los dos años que le restan y cuál puede ser el futuro de la Concertación y de la Alianza, la coalición opositora de derecha?

Desde el punto de vista del balance, resulta evidente que el gobierno se ha caracterizado por un estilo más receptivo y acogedor frente a las demandas y movilizaciones sociales y por su intención de resolver los problemas inmediatos que pueden aquejar a la ciudadanía. Ello quedó de manifiesto en el caso de las movilizaciones estudiantiles en 2006 y en las de los subcontratistas del Cobre en 2007. Las primeras plantearon una

crítica radical al sistema educativo a partir de demandas concretas sobre pasaje escolar, entre otras, y un cambio en la legislación. Las segundas significaron una crítica a todo el sistema laboral actual, también a partir de demandas concretas sobre las contrataciones y en el marco de un cambio legislativo. La respuesta gubernamental no fue la represión ni la descalificación, sino la acogida de esas demandas y la constitución de consejos asesores amplios para pensar y resolver los problemas de fondo. Pero esta vía adolecía de dos fallas. Por un lado, se carecía de un horizonte o guía que orientara las soluciones de fondo, es decir de un proyecto político en torno al cual se articularan tales soluciones. Además, al integrarse estos consejos con todas las posturas e intereses en juego se relegitimaban las posiciones que habían sido derrotadas durante las movilizaciones y se terminaba en un empate político legislativo debido a que el sistema electoral chileno favorece el empate entre la mayoría gubernamental y la minoría de derecha opositora.

Otro gran conflicto que enfrentó el gobierno y que fue dominante durante 2007 fue el derivado del proyecto Transantiago, que intentaba una verdadera revolución



en el transporte público de la capital. Los errores de diseño, pero sobre todo la nula vinculación con la ciudadanía para prepararla y hacerla participar en un cambio profundo de sus modos de vida cotidianos durante el gobierno de Lagos, hicieron pagar un alto costo al gobierno de Bachelet en materia de aprobación pública. Si bien la respuesta técnica tardó en llegar —su implementación está aún pendiente— y obligó a un cambio de gabinete, el nuevo ministro ha avanzado significativamente

en la solución. Lo importante es que otra vez la respuesta del gobierno fue sensible a la protesta ciudadana, pero no logró aprovechar la situación para dar un salto en la conducción política y pasar a la iniciativa.

Y aquí radican entonces los dos grandes problemas del gobierno, sin dejar de valorar eso que puede llamarse el nuevo estilo, que en estricto rigor no es “gobierno ciudadano” como les gusta

TEMAS PENDIENTES

Instalación, 2002

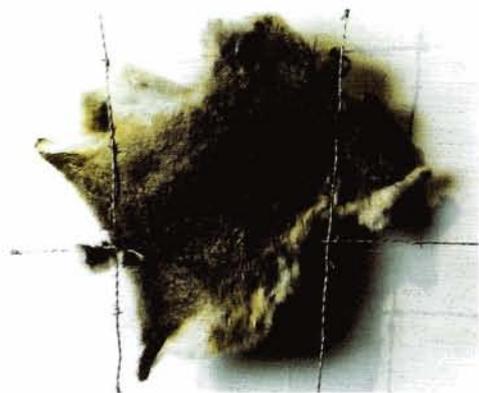
Foto: Gian Paolo Minelli

decir a la Presidenta y a sus colaboradores más cercanos, sino que es un estilo de gran sensibilidad pero sin un eje conductor ni una capacidad de liderazgo y ordenamiento. El primero es la evidente contradicción entre la preocupación por un Estado de protección y una conducción económica que no se plantea las dos únicas condiciones necesarias para ello: una mayor injerencia del Estado en la economía y una drástica redistribución de la riqueza y el ingreso, a través de una reforma tributaria, que ha sido explícitamente excluida de la agenda gubernamental. El segundo es que ni la Presidenta ejerce un liderazgo fuerte, lo que no sería grave porque no es su estilo —como sí lo fue en el caso de Lagos—, ni tampoco ha tenido, al menos hasta el cambio de gabinete de enero de este año, un sólido equipo de conducción y negociación política, más allá de la capacidad y alta calidad personal de ministros y asesores.

Todo lo anterior ha creado el espacio para que la derecha opositora, que cuenta con el monopolio de los medios de comunicación y tiene neutralizado tanto el canal público de televisión como los medios que podrían considerarse afines al gobierno, desarrolle su cara más agresiva, que culmina en denuncias de corrupción al gobierno, una acusación constitucional a la Ministra de Educación, y la presentación prematura de las candidaturas presidenciales para el próximo gobierno, dando por superado el actual. Al mismo tiempo, las debilidades mencionadas han permitido que en la Concertación se planteen también

iniciativas de candidaturas presidenciales prematuras, se exacerbén disputas por el poder y por posicionamientos hacia el futuro, y se alimenten chantajes de grupos que lograron dividir a dos de sus partidos: el Partido por la Democracia y el Partido Demócrata Cristiano. Estos sectores terminaron creando nuevos referentes que se vinculan a la Alianza por Chile, la coalición de derecha opositora formada por la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.

En este clima que parece generar una imagen de desgobierno, la Presidenta ha respondido de dos maneras principales, más allá de la constante presencia en terreno y el contacto con los sectores populares. Por un lado, a través de los cambios de gabinete, aunque solo el último de ellos parece rendir los frutos esperados de cohesión y de conducción. Por otro lado, a través de la política de buscar acuerdos con la oposición para aprobar proyectos emblemáticos como el de la reforma previsional, el de seguridad ciudadana y los pendientes en materia de educación y equidad social, para todos los cuales se crearon previamente los consejos a los que ya aludimos. El problema principal reside en que estos acuerdos, más que ser el resultado de consensos fundamentales sobre aspectos básicos de la sociedad, tienden a consagrar aquellos elementos centrales del statu quo heredado de la dictadura y expresan, por lo tanto, situaciones de poder y veto por parte de los grupos con intereses creados y de la derecha, que no está dispuesta a alterar los núcleos duros de la institucionalidad



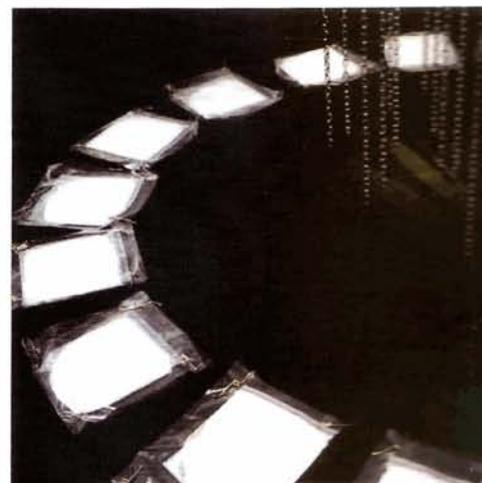
generada bajo el régimen militar ni tampoco el carácter inequitativo del modelo socioeconómico.

De modo que, en lo que queda del período, no parece predecible que el gobierno dé un golpe de timón hacia una opción definitivamente socialdemócrata ni tampoco en el sentido de promover una movilización que tienda a un cambio institucional. Lo más probable es que la reforma política pendiente, si es que ella ocurre, se reduzca a incorporar a algunos sectores excluidos hasta ahora del sistema electoral, como los comunistas, sin alterarlo radicalmente en una perspectiva participacionista y representativa, y que nuevas reformas sociales, al tiempo de implicar una positiva mayor expansión hacia sectores sociales desfavorecidos, consoliden los rasgos fundamentales del modelo socioeconómico. Lo paradójico de esto es que todos los partidos de la Concertación han planteado en sus diversos congresos e instancias ideológicas o programáticas la necesidad de un nuevo ciclo de la Concertación, una refundación marcada por el acento en las reformas político-institucionales (especialmente una nueva Constitución) para poder pasar así definitivamente de un modelo liberal corregido a un modelo socialdemócrata que ataque en primer lugar el problema de la desigualdad. Por otro lado, también es muy probable que el gobierno vaya recuperando sus niveles de aprobación en la opinión pública y que la Concertación obtenga un nuevo triunfo electoral en las elecciones municipales de fin de año. Con ello quedará en mejores condiciones para enfrentar las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2009.

Ahora bien, el primer problema que enfrenta la Concertación es que no parece haber asimilado como conjunto los grandes avances pero tampoco las grandes carencias de sus gobiernos. En otras palabras, sigue entrampada en tareas propias de su época fundacional (completar la democracia política y corregir

los déficit del modelo socioeconómico heredado) y no ha planteado un nuevo proyecto político (nueva Constitución y nueva institucionalidad) ni económico (paso a un modelo de sociedad o Estado de protección), para incorporar a sectores excluidos hasta ahora. El segundo es que no ha sido capaz de generar su propia institucionalidad como coalición de gobierno que permita, entre otras cosas, establecer un sistema de resolución de la cuestión de los liderazgos presidenciales en lugar de recurrir a los mecanismos *coyunturales* que acumulan resentimientos mutuos que reaparecen en la siguiente ocasión. Es evidente que un candidato del bloque Partido Socialista-Partido por la Democracia tiene mayor capacidad de ganar un nuevo gobierno, pero también es cierto que a la Democracia Cristiana, afectada por una reciente división, se le hace muy difícil apoyarlo por tercera vez consecutiva. Y esto no se resuelve sin una visión de largo plazo y una institucionalidad que dé garantías a todos de tener su oportunidad de aspirar a la candidatura presidencial, que hasta ahora ha sido equivalente a ganar la elección y ser presidente. Porque, en la medida en que la Concertación, a partir de sus componentes actuales y sin perder ninguno de ellos, se expanda hacia otros sectores políticos en el campo de la izquierda, no parece posible un triunfo de la derecha, demasiado identificada –pese a los esfuerzos recientes de Joaquín Lavín de refundarla en una nueva perspectiva– con su pasado autoritario o con su impronta oligárquica o plutocrática.

De modo que si la Concertación resuelve bien sus dos problemas centrales, nada excluye que pueda ganar un quinto gobierno y cumplir la promesa pendiente de pasar desde una época pospinochetista a la era democrática del bicentenario. ■



EL GOBIERNO SE HA CARACTERIZADO POR UN ESTILO MÁS RECEPTIVO Y ACOGEDOR FRENTE A LAS DEMANDAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES Y POR SU INTENCIÓN DE RESOLVER LOS PROBLEMAS INMEDIATOS QUE PUEDEN AQUEJAR A LA CIUDADANÍA.